

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, treinta (30) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Exp. 005-2020-00294-02

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de HERNANDO OBANDO SERNA frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en contra de Colpensiones, Protección S.A. y Porvenir S.A.

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la sociedad ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., a la abogada María Alejandra Ramírez, con tarjeta profesional No. 359.508 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES:

En sentencia proferida el 25 de marzo de 2021 el juez de primera instancia, dispuso la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que realizó el demandante; ordenó el regreso automático al régimen de prima media, administrado por Colpensiones; condenó a Porvenir S.A. a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, trasladara con destino a Colpensiones los saldos de la cuenta de ahorro individual incluidos frutos y rendimientos financieros, asumiendo de su patrimonio al igual que Protección

S.A. los conceptos de comisiones de administración, el valor de las pólizas provisionales, lo descontado por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima y para el fondo de Solidaridad pensional; ordenó a Colpensiones a recibir los aportes y a reconocer una pensión vitalicia de vejez a partir del 26 de septiembre de 2017 con derecho al disfrute desde la desafiliación al Sistema. Le impuso las costas a Protección S.A. y a Porvenir S.A., incluyendo por agencias en derecho la suma total de \$908.526, estando a cargo de cada una la proporción del 50% (Archivo 37 Expediente Digital).

Esta decisión, se mantuvo en segunda instancia, oportunidad en la que esta sala de decisión se abstuvo de imponer costas procesales por la forma en que fueron desatadas las inconformidades.

Con estos referentes se aprobó la liquidación de costas por auto del 22 de octubre de 2021 (Archivo 41 Expediente Digital), decisión frente a la cual el mandatario judicial del actor expresó su inconformidad, interponiendo el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación. Negado el primero por estimar que dicho monto se ajustaba a derecho (archivo 46 Expediente Digital), se concedió el segundo, siendo esta la razón por la cual conoce esta Sala de Decisión Laboral.

La censura busca, frente a la suma que se señaló a favor de la demandante, que su monto se incremente bajo una sana y equitativa interpretación de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, considerando que las agencias en derecho para este asunto equivalen como mínimo a la mitad de lo regulado, es decir, \$4.542.630 que equivalen a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en tanto está inmiscuido el reconocimiento de una pensión de vejez que se trata de una prestación periódica y la ineficacia corresponde a una pretensión declarativa, debiéndose por demás considerar los criterios propios del proceso cuya rigurosidad, dedicación, y representación idónea resaltaron, sin olvidar las gestiones administrativas adelantadas ante las convocadas a juicio (Archivo 42 Expediente Digital).

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

De cara a los antecedentes, el problema jurídico en esta ocasión se circunscribe a determinar si es plausible o no aumentar el monto de las agencias en derecho, incluidas en el auto que aprobó la liquidación de costas.

Pues bien, por sabido se tiene que para la estimación de las agencias en derecho debe acudirse a las tarifas fijadas por los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, pues a estos remite el numeral 4º del artículo 365 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS; dicha disposición que regula los parámetros para la liquidación concentrada de costas, señala que si en los referidos acuerdos se establece un mínimo, o éste y un máximo, para la movilidad entre uno u otro límite, *el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

El Acuerdo que aplica a este proceso es el PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, mismo que en su artículo 5º regula la tarifa de las agencias en derecho de primera instancia para los procesos declarativos sin cuantía, entre 1 y 10 SMLMV.

Es preciso aclarar que las costas fijadas a cargo de los fondos privados demandados tienen que ver con la prosperidad de la pretensión referida a la ineficacia de traslado, siendo el reconocimiento de la prestación económica del Sistema a cargo de Colpensiones, entidad de la que no era dable asumir una conducta activa frente a ese otorgamiento por no ser el demandante su afiliado, circunstancia por la que no fue condenado en costas ni se integra en el análisis de las agencias en derecho la prestación periódica ordenada, cuyo disfrute no se ha materializado.

Vistas así las cosas, se pone de relieve que la actuación de la parte recurrente fue visible en la primera instancia, al promover la acción judicial y asistir a las diligencias con interposición del recurso de apelación; y en la segunda instancia presentó alegaciones. En consecuencia, si bien el tema en litigio, ha sido ampliamente decantado por la jurisprudencia nacional, lo que hizo que su manejo no fuere complejo, ni implicara un desgaste evidente a la parte promotora, atendiendo a que igualmente se trató de un impulso procesal que acarrea mínimamente gastos de representación, si resulta meritorio en proporción a la naturaleza de lo debatido en coherencia con su relevancia social, y la duración del proceso, proceder con su incremento en la suma total de \$1.817.052 que corresponde a 1 SMLMV para la data de fijación a cargo de cada fondo privado demandado, con la que se permanece en el rango mínimo dispuesto por las reglas vigentes, pero se atienden los criterios establecidos para definir la tarifa, con la valiosa precisión referida a que no le es imperativo a los falladores sujetarse el tope máximo definido, pues el rango establecido simplemente orienta al juez para que éste, haciendo un ejercicio discrecional ponderativo, fije un monto que considere equitativo, razonable, prudente y proporcional.

En consecuencia, conforme a estas breves pero precisas consideraciones y sin lugar a otras argumentaciones, se modificará el auto recurrido para en su lugar imponer como agencias en derecho de primera instancia la suma de \$2.000.000 a cargo de Porvenir S.A. y Protección S.A. Sin costas en esta instancia.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **MODIFICA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, y en su lugar, impone por agencias en derecho de primera instancia la suma de \$1.817.052 que corresponde a 1 SMLMV a cargo de cada fondo privado demandado.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 217 fijados el 1° de diciembre de 2022, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.